

Intervención de Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante la ODHACO, con motivo del quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz

Noviembre 9 de 2021

Gracias ODHACO, saludos a las y los parlamentarios y otros participantes en este importante evento.

El 5to aniversario es una oportunidad para tejer un balance, un balance de la implementación de un Acuerdo de Paz que es más que un acuerdo entre 2 partes. Este es un acuerdo para todo un país, que pone a las víctimas en el centro de su preocupación. Este Acuerdo busca sembrar una paz duradera abordando las causas profundas de la guerra.

Si comparamos con los momentos más intensos del conflicto armado interno, podemos afirmar que Colombia ha llegado lejos.

La **desmovilización de las FARC y la constitución de un nuevo partido político** es uno de los resultados importantes del proceso de paz.

La **celebración próximamente de las elecciones de las llamadas 16 “curules para la paz”** es un hito importante para la paz que busca resolver una deuda histórica con las víctimas de las zonas más afectadas por el conflicto y fortalecer la participación política de los sectores más excluidos de la sociedad.

En estos últimos cinco años, el mundo también ha podido observar **avances significativos en el desarrollo de la justicia transicional en Colombia**. En particular a través de las **investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz en distintos casos**, entre ellos el caso 001 sobre toma de rehenes y otras privaciones de la libertad por parte de las FARC, y el caso 003 sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por fuerzas del Estado. La **Comisión de la Verdad** presentará su informe final en los próximos meses y la Unidad de Búsqueda avanza con sus planes regionales de Búsqueda.

A pesar de los avances, los riesgos permanecen. En particular por la desigualdad profunda que afecta al país y que siembra inestabilidad, pero también por la expansión de la violencia y el control territorial de grupos armados no estatales y criminales en los territorios más desfavorecidos del país. Es esta violencia la que genera la muerte de líderes y lideresas sociales, de autoridades étnicas, así como para las personas defensoras de derechos humanos y las y los exintegrantes de las FARC. Muchas comunidades expresan gran desesperanza por esta situación que afecta gravemente sus derechos y amenaza la pervivencia de pueblos indígenas y afrodescendientes. Estos grupos imponen controles que socaban el respeto de los derechos humanos de las comunidades, confinándolas, amenazándolas, limitando su movimiento, afectando sus prácticas ancestrales, el tejido social de las comunidades, a través del reclutamiento, y hasta su capacidad de alimentarse.

Muchas comunidades afectadas por esta violencia expresan una pérdida de confianza en la institucionalidad ante la expansión del control de estos grupos.

Con miras hacia el futuro es importante extender la presencia integral del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto. Esto es clave para no dejar solas a las comunidades, sus autoridades y liderazgos. Es necesario consolidar la reforma rural integral, incluida la restitución de tierras y acelerar la implementación participativa de los Programas Desarrollo con Enfoque Territorial.

Valoramos el compromiso de miles de campesinos y campesinas de participar en el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos previsto en el Acuerdo. Su seguridad debe reforzarse y es necesario fortalecer la capacidad del Estado para priorizar la implementación de este programa.

Por último, subrayar la importancia de que el Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adopte e implemente una política de desmantelamiento de los grupos generadores de violencia, concertada entre el Estado con representantes de la sociedad civil, como previsto en el acuerdo.

La implementación del acuerdo requiere del respaldo de todas, trasciende gobiernos y se construye al largo plazo. Nuestro mandato es el de acompañar al Estado y la sociedad civil en este esfuerzo. El acompañamiento de los países de la UE es una pieza clave para la

implementación del acuerdo y la protección de los derechos humanos por ello agradecemos su interés y constante apoyo.